

Del estallido social a la comunidad (geo)política de pertenencia

América Latina y el Caribe entre 2019 y 2024

Jaime A. Preciado Coronado y Jochen Kemner

■ Doi: 10.54871/ca25es1b

En 2019, se registran manifestaciones masivas con ciertas características compartidas en la lucha por la calle y por los territorios en distintas partes del mundo que, indefectiblemente, desembocan en luchas más o menos organizadas en torno del poder político. Ese año, estallaron protestas alrededor del planeta que toman una forma de manifestación masiva cuya novedad es la politización de las demandas dado su carácter cuestionante del gobierno y del régimen político en el que se sustenta. Algunos países donde hubo estallidos sociales con esas características fueron: Argelia, el independentismo catalán en España, Francia, Georgia, Guinea, Hong Kong en China, Irak, Irán, Líbano, Reino Unido, entre otros. En América Latina y el Caribe destacaron las revueltas sociales registradas en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Puerto Rico. Además, en nuestra región, se registra un estallido social transnacional único en el mundo: las caravanas migrantes que atraviesan México buscando llegar a Estados Unidos.

A esta lista se agregaron otros estallidos sociales entre 2019 y 2024, que fueron dinamizados por las respuestas sociales movilizadas frente a la pandemia del COVID-19 y las medidas

gubernamentales para combatir la crisis sanitaria (Gutiérrez Cham, Herrera, Kemner, 2021). Actualmente, crecen los focos de malestar en el mundo, sin embargo, no todas las movilizaciones sociales desembocan en el cuestionamiento de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en gobiernos y Estados nacionales, y son menos los casos en los que surgen procesos instituyentes de comunidades políticas con sentido de pertenencia autónoma. Tal malestar crece en Nicaragua, Venezuela y Cuba, aunque la intensidad del estallido social y su repercusión sobre sus comunidades políticas instituidas en sus respectivos Estados nacionales es muy heterogénea, respecto de su masividad, permanencia y grado en el que se conforman movimientos sociales que prometen transitar hacia reivindicaciones instituyentes.

En la mayoría de los estallidos sociales se conjugan demandas antisistémicas dirigidas contra el sistema financiero internacional y su impacto en los gobiernos y sus políticas públicas en los Estados nacionales: pensiones, seguridad social, empleo, salario; también surgen ensamblajes sociales que visibilizan otras agendas que vinculan lo global y lo local, en torno del cambio climático –donde destaca el movimiento juvenil *Fridays for Future* que a nivel internacional fue el gran movimiento antisistémico en 2019, pues durante ese año convocó protestas de más de 4 millones de participantes–, la transición energética o la soberanía alimentaria, así como cuestionamientos sobre el patrón de acumulación capitalista, particularmente el extractivismo, la acumulación por despojo, la precariedad laboral.

En el fondo hay un fuerte cuestionamiento del neoliberalismo y sus “consensos” privatizadores, desreguladores de la potencia pública, punitivos con violencias selectivas, destructores de la naturaleza, que tienen raíces neocoloniales, patriarcales, supremacistas blancas racistas. Cuestiones histórico-estructurales cuya crisis detona diversas manifestaciones masivas que se han caracterizado como estallidos sociales.

En torno de tales acciones colectivas, se configuran ensamblajes sociales complejos en su tránsito de movimientos sociales hacia el campo de la y lo político, en un doble sentido: por un lado, hay confrontaciones, acuerdos y desacuerdos que son simultáneamente sociales y políticos, pues esas luchas, expresadas en el espacio público: la calle, los territorios, interrogan el papel de las instituciones públicas y privadas, así como se cuestionan las comunidades políticas realmente existentes en el gobierno y el Estado nacional, como factor decisivo ante la reproducción del régimen de acumulación capitalista.

Por otro lado, se cuestionan las prácticas patriarcales racistas, supremacistas nacionalistas blancas, colonialistas y, simultáneamente, se hacen visibles procesos políticos instituyentes que encuentran en su cima la configuración de comunidades políticas cuyo sentido de pertenencia se da en dos esferas políticas: hacia dentro y contra del gobierno y del Estado instituido, los movimientos sociales buscan superar los límites de la democracia liberal, que privilegia al ámbito electoral, procedimental y elitista, dentro de lo cual se aportan nuevos formatos de democracia participativa, que incluyan las voces excluidas, lo cual no desemboca mecánicamente en luchas antisistémicas o antineoliberales. Paralelamente, los estallidos sociales enriquecen experiencias de autogobierno y de luchas por la autogestión comunitaria, en las que su horizonte es crítico del Estado y anticapitalista.

Bajo estas premisas se ideó el estudio alrededor de la configuración de comunidades (geo)políticas de pertenencia, que fueron impulsadas al calor de los estallidos sociales surgidos en 2019 en seis países seleccionados bajo el criterio de su contenido potencialmente anticapitalista.¹ En el marco de dicho proyecto, se invitó en

¹ No se analizan los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde, si bien hubo manifestaciones masivas antes, durante y después de 2019, el carácter de las incipientes comunidades (geo)políticas de pertenencia surgidas en este periodo, corresponde a la cuestión democrática, pero escapa al marco anticapitalista por el que se opta en este libro.

mayo de 2023 a un taller con expertas y expertos de los seis países, más el caso específico de las Caravanas migrantes que se enfrentan a la “frontera vertical” representada por México, en su trayectoria hacia Estados Unidos. Agradecemos a María Lois (Bolivia), Claudia Zapata (Chile), Axel Rojas (Colombia), Valeria Coronel (Ecuador), Jefferson Pierrelus (Haití), Liliana Cotto-Morales (Puerto Rico) y Daniel Villafuerte (Caravanas de migrantes) por su disponibilidad de compartir su análisis.²

Cada especialista recibió un cuestionario detallado en el que se establecieron las categorías analíticas comunes, de manera que se permitiera un análisis comparativo y algunas líneas de reflexión, generales y particulares, con el objetivo de indagar sobre la pertinencia de ese complejo tránsito de la acción colectiva hacia la configuración comunitaria de la esfera de la política y del poder:

1) En los estallidos sociales convergen una amplia gama de movimientos sociales que tienen demandas particulares, en relación con derechos económicos, sociales culturales, ambientales, que transitan hacia el campo de la y lo político dentro de un espectro geopolítico que unifica lo particular de cada demanda colectiva, con lo general que se condensa en las diversas comunidades políticas de pertenencia; sean las instituidas en el estado nacional y sus órdenes locales de gobierno, las comunidades políticas supranacionales multilaterales y globales e, incluso, las instituciones de la comunidad política mundial que pretende convocar Naciones Unidas. Paralelamente, la acción colectiva transita hacia comunidades políticas de pertenencia de carácter instituyente, que cuestionan la matriz estadocéntrica como referencia central única de pertenencia. Sus vías son diversas en sus estrategias frente a lo instituido y registran divergencias sobre el énfasis que se otorga al proceso instituyente comunitario. En esos movimientos sociales

² Las sesiones fueron moderadas por Ulrike Capdepón, Carmen Chinas, Daniel Flores, Luis Enrique González Araiza, Celia Magaña, Nicolás Rey y Pablo Uca los cuales igualmente agradecemos.

politizados, las luchas de reivindicación se agregan en ensambles sociales complejos mediante tres procesos que están implicados entre sí:

- a. *Políticas de identidad*, donde la agrupación o agregación de demandas corresponde a la identificación de una base de intereses colectivos que están vinculados a un origen común que está amenazando lo étnico, lo religioso, la equidad de género, la diversidad sexual, cualquier comunidad de intereses que comparte un sentido de pertenencia intersubjetivo.
- b. *Políticas de reconocimiento*: se refieren al ámbito político de la reivindicación en las diversas esferas de la vida colectiva, ante conflictos que amenazan las condiciones materiales objetivas de pertenencia a una comunidad política determinada. Aquí se pueden combinar políticas de identidad y de resistencia e incluso políticas que buscan alternativas antisistémicas en las que el Estado, la religión y la familia, cobran sentido en el plano de la convivencia-conflicto en el espacio de lo político y lo geopolítico.
- c. *Políticas de pueblo*, más allá del debate sobre populismos, se problematiza la categoría de pueblo como la base sustantiva de la comunidad política de pertenencia, como expresión de totalidad social que sirve de base a la soberanía, que no está reducida a la soberanía nacional y que expresa la lucha por la identidad y el reconocimiento por el interés general. Estas políticas se organizan en ensamblajes sociales complejos: el pueblo impedimento-resistencia; el pueblo plebiscitario; el pueblo juicioso y crítico. Tres modos de ensamblaje que tienden a articular a la comunidad política de pertenencia instituyente como acción colectiva liberadora.

2) Actores portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras. Los estallidos sociales visibilizan y encarnan la crisis del régimen de acumulación capitalista, pero también dejan

ver potencialidades que están larvadas en forma de “latencias”. En la acción colectiva organizada se pueden distinguir dos grandes estrategias que son consecuencia de la tensión entre movimientos sociales y estructuración del campo (geo)político:

- a. *Las luchas antisistémicas que se dan desde dentro y contra el estado capitalista*, donde se debaten límites, obstáculos y potencialidades de las reformas frente al cambio de régimen político, económico y social. Aquí las estrategias varían entre propuestas antineoliberales y anticapitalistas, entre progresismos e izquierdas que se reclaman vinculadas con movimientos sociales transformadores, algunos de los cuales siguen enfrentando el dilema entre reforma y revolución dentro de sus estrategias organizativas. En estas luchas desde dentro y contra el Estado, el poder y la conformación de un gobierno de carácter popular, en los distintos órdenes del Estado nacional, juegan un papel central; de ahí la vigencia del imaginario contractualista y del pacto social que renueva instituciones derivadas de las constituciones políticas nacionales, que son nutridas por procesos instituyentes y con formatos democráticos participativos que incluyen, pero van más allá de los procesos electorales. Un campo político en el que se conflictúan los progresismos, cuyos organismos nacionales van planteando una escala internacional de actuación, en la Internacional Progresista, y las izquierdas articuladas con movimientos sociales antisistémicos que conforman a su vez actores red en los que se vinculan lo global y lo local. Se puede decir que estas redes comunitarias configuran lo que apunta a ser una Internacional Rebelde.
- b. *Las luchas antisistémicas por la supresión del Estado, la autonomía comunitaria bajo principios de autogestión y autogobierno*, han sido dinamizadas por los estallidos sociales. En su origen, las luchas comunitarias asumen estrategias anticapitalistas, a partir de su apego a una base social conformada

por pueblos originarios, afrodescendientes, que se articulan en “pueblos en movimiento”, los cuales practican un marcado énfasis en experiencias locales de lucha y resistencia que buscan crear alternativas sustentadas en ensamblajes comunitarios de pertenencia. Tales comunidades, confrontan la colonialidad del poder mediante ensamblajes sociales organizados que trascienden la autarquía localista de la escala comunitaria. En ese camino, se proyecta un imaginario internacionalista que propicia una ecología de saberes compartidos entre diversas experiencias comunitarias en América Latina, como son la del EZLN, del wallmapu chileno y argentino, del cauca colombiano, de las comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, entre otras y, en el mundo destacan: la Rojava kurda, la Cooperativa Integral Catalana, o los movimientos Ubuntu, en África, Satyagraha en la India y de la Vía Campesina a escala del Sur Global.

Tal constitución de poder comunitario sin Estado, presenta varias interrogantes en torno de la relación con las comunidades políticas de pertenencia instituidas, su posible coexistencia, o negación, o destrucción intencionada. La interfaz entre las luchas desde dentro y contra el Estado, versus las luchas por suprimir al Estado, plantea interrogantes sobre las diferencias entre gobierno y estado, entre pueblo y nación, entre la gestión de las agendas globales y locales, así como sobre el campo contradictorio entre procesos electorales, reforma y cambio radical, demandas sociales y demandas comunitarias. Habría que preguntarse si los estallidos sociales están contribuyendo a la formulación de las relativamente novedosas demandas sobre bienes públicos globales relativas al agua y la tierra, a la defensa de la biodiversidad, contra el calentamiento climático y todas las formas de contaminación. Asimismo, cuestionarse sobre las diferencias entre la agenda global de los bienes públicos y la agenda local, territorializada, que plantean las demandas sobre los bienes comunitarios. Una tensión que se proyecta en la comunidad

política de pertenencia instituyente, que se conoce como *Abya Yala/Afro/Latino-América*, o como *Afroamérica Ladina*.

3) Actores portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras. Los estallidos sociales visibilizan y encarnan la crisis del régimen de acumulación capitalista, pero también dejan ver potencialidades que están larvadas en forma de “latencias”. En la acción colectiva organizada, se pueden distinguir dos grandes estrategias que son consecuencia de la tensión entre movimientos sociales y estructuración del campo (geo)político:

- a. La politización de los estallidos sociales detona cuestionamientos antisistémicos relacionados con el régimen de acumulación capitalista, que critican a la “Trinidad del Maldesarrollo” (FMI-BM-OMC) por sus políticas de ajuste y austeridad que provocan mayor desigualdad social a escala mundial, supranacional regional y en los Estados nacionales, que también critican los efectos perversos del cambio climático, la dominación patriarcal, la violencia sistémica estructural, el racismo, la violación de derechos humanos. Todo lo cual se acentuó por la pandemia del coronavirus. Desde los estallidos sociales –revueltas, insurgencias– se cuestiona el patrón extractivista, los consensos neoliberales sobre privatización-desregulación de la potencia pública, la miniaturización del Estado, la necropolítica demográfica y ambiental, la narrativa del Green New Deal, el Estado punitivo asociado con el crimen organizado. Todo lo cual configura las agendas geopolíticas en las comunidades políticas de pertenencia.
- b. En el debate sobre la democracia, el autoritarismo y la emergencia neoconservadora, se cuestiona especialmente al neoliberalismo que caracteriza al régimen político y al sistema de partidos, que se apoyan en una democracia elitista, procedimentalista, minimalista, cada vez más contaminada por la judicialización de la política. Ante el desencanto y la desconfianza

de cara a los regímenes políticos, las luchas que contienen los estallidos sociales se vinculan con políticas de ciudadanía, con prácticas comunitaristas, y con la lucha por los derechos humanos frente a la desigualdad social, la pobreza, la exclusión racista y la opresión patriarcal de género. Entre la crisis global y sistémica los conflictos se acentúan en torno de luchas por el horizonte histórico de sentido sobre valores culturales civilizatorios, derechos y poder de la naturaleza.

En las revueltas sociales masivas del periodo entre 2019 y 2024, se conjugan la lucha por la calle y la lucha por los territorios, las narrativas e interpretaciones sobre las megatendencias del proceso de globalización (actualmente una desglobalización impulsada por la crisis del llamado Orden Mundial), las luchas contra el extractivismo, el “capitalismo de plataformas”, los complejos militar-industrial-farmacéutico-mediático, y la economía digital, la inteligencia artificial y las supercomputadoras. Además, existe un amplio debate sobre los alcances de la idea de bien público y de bien comunitario a escala global, impulsado por las demandas antiprivatizadoras del agua, de la transición energética y de la soberanía alimentaria, y, también, propiciado por las demandas sobre bienestar y lo que se conoce como sociedad de los cuidados.

A partir de estos tres grandes temas, cada especialista respondió a las siguientes preguntas que ayudaron a detonar el debate. Durante dos días estuvimos reunidos para escuchar y debatir cada una de las siete presentaciones. Posteriormente, cada especialista presentó un texto sobre el caso abordado a partir de los debates transcritos, el cual fue revisado por los coordinadores de este libro, para lo que contaron con el apoyo de Dafne Elizondo, Daniel Flores y Cristina Fuentes, a quienes agradecemos su cuidadoso trabajo. El texto final, que aparece aquí publicado, fue revisado minuciosamente por los coordinadores de esta obra. Preferimos mantener el carácter de las intervenciones de debate que les pedimos inicialmente. Por esto son textos sin referencias ni bibliografías.

A continuación, las tres preguntas generadoras del debate:

1) ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, los Estados nacionales y en los procesos comunitarios instituyentes?

- Políticas de identidad.
- Políticas de reconocimiento.
- Políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”).

2) ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras?

- Desde dentro y contra el Estado.
- Autonomías comunitarias sin estado.

3) Modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia.

- Anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”.
- Lucha contra el enfoque estado céntrico desde movimientos sociales “politizados”.
- Democracia y procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas; tensiones entre gobiernos progresistas e izquierda social.
- Violencia sistémica, procesos de paz, derechos humanos, agenda antipatriarcal.
- Luchas contra el racismo y diversas formas de discriminación de las minorías y de las disidencias.

En cuanto a la primera pregunta, María Lois destacó que, entre 2019 y 2022, Bolivia fue escenario de momentos cruciales que marcaron

el panorama sociopolítico. De acuerdo con la especialista en el tema, el primero de estos eventos en el orden cronológico fue la denuncia de un supuesto fraude electoral, por parte de amplios sectores de la oposición y de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Este evento desencadenó una ola de protestas y tensiones que cuestionaron la estabilidad del sistema político y culminaron en el Golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. El segundo evento, en agosto de 2020, consistió en un bloqueo masivo que demandaba la realización de elecciones democráticas y una mejor gestión de la pandemia. Esta movilización, de gran alcance y participación, se convirtió en un punto de inflexión para reactivar la comunidad política instituyente del proceso de cambio iniciado en 2005. Finalmente, en 2022, el paro de 36 días en Santa Cruz por el censo reflejó las persistentes divisiones y tensiones entre visiones centralistas y comunitarias dentro del Estado Plurinacional. Para María Lois, estos eventos son ejemplos claros de cómo la diversidad étnica y las demandas populares siguen siendo un eje estructurante en el panorama político boliviano.

En Chile, uno de los casos que más llamó la atención a escala regional e internacional por haber sido considerado un caso ejemplar de neoliberalismo, Claudia Zapata considera que el estallido social de octubre de 2019, conocido como el 18-O, fue mucho más que un estallido: se trató de una revuelta popular de una magnitud inédita en la historia reciente del país. Este momento condensó años de conflictos sociales acumulados, incluyendo las luchas estudiantiles, feministas, ambientales e indígenas. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” capturó el sentimiento colectivo de rechazo al modelo neoliberal y al orden constitucional heredado de la dictadura de Pinochet. Pese a ello, aunque este estallido abrió la puerta a la posibilidad de una nueva Constitución, y llevó al poder a un gobierno de izquierda como comunidad política instituida, las tensiones entre los movimientos sociales y los partidos políticos,

sumadas al impacto de la pandemia, complicaron el avance hacia un proyecto cohesivo de transformación sociopolítica.

En Colombia, un país que se resistió a la llamada “marea rosa” de inicios del siglo XXI y que, de hecho, se posicionó durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) como uno de sus grandes opositores y el más importante aliado de Estados Unidos en la región, Axel Rojas se refiere a 2018 y 2019 como manifestaciones y solamente a 2021 como estallido social. Aunque es polémico, estos tres momentos de movilizaciones colectivas masivas fueron la culminación de décadas de desigualdades estructurales, violencia estatal y exclusión social, exacerbadas por los efectos de la pandemia. Estas movilizaciones lograron articular demandas de justicia social y derechos básicos, desafiando el modelo neoliberal imperante.

Por su parte, en Ecuador, un país que pasó del progresismo de Rafael Correa (2007-2017) al neoliberalismo conservador de Lenín Moreno (2017-2021) con todo lo que ello implica, Valeria Coronel explica que las movilizaciones sociales de 2019 y 2022, lideradas por el movimiento indígena de la CONAIE, y acompañado siempre por organizaciones populares urbanas, barriales y el movimiento de mujeres, cuestionaron en el marco del giro hacia el neoliberalismo y de desmantelamiento de la institucionalidad, las políticas de austeridad y el extractivismo exacerbado por el banquero Guillermo Lasso (2021-2023), consolidándose, así, como una respuesta organizada, no sin fisuras, respecto de la lucha contra la exclusión económica. En estos países, Chile, Colombia y Ecuador, las protestas reflejaron una capacidad notable de vincular lo local con lo nacional, y lo nacional con lo global, permitiendo que las críticas al neoliberalismo se posicionaran como eje central del debate público regional.

En Puerto Rico, Liliana Cotto analiza cómo el “Verano del 2019” representó un momento de resistencia colectiva conformado por una amplia gama de actores, cada uno con sus reclamos propios, contra la corrupción gubernamental y las políticas neoliberales impuestas por la Junta de Control Fiscal, creada en 2016. De acuerdo

con la especialista, este contexto permitió a las comunidades aprovechar la crisis política y de legitimidad, para fortalecer alternativas centradas en la justicia social y la autonomía.

En Haití, por su parte, Jefferson Pierrelus describe una realidad distinta a todas las demás, pero igualmente intensa: desde 2018, las movilizaciones sociales han estado marcadas por la lucha por la supervivencia en medio de un colapso estatal y una pobreza extrema en lo que llega a definir como un “Estado fallido”. Según Pierrelus, estas movilizaciones, aunque profundamente condicionadas por la injerencia externa, el colonialismo interno y la violencia estructural, han encontrado en las redes comunitarias un pilar fundamental para la organización y la resistencia.

En cuanto a los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras, Lois destaca el papel central de los movimientos indígenas en Bolivia, en particular su relación con el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), el partido liderado por Evo Morales (2006-2019). Estas comunidades enfrentan una constante tensión entre sus aspiraciones de autonomía y las dinámicas centralizadoras del Estado; entre lo social instituyente y lo político instituido, como sucede en otros países con experiencias progresistas. De forma paralela, en Chile, Colombia y Ecuador, movimientos feministas, estudiantiles, indígenas y afrodescendientes emergieron como actores clave en la lucha por los derechos fundamentales y la justicia social, a pesar de enfrentarse a la estigmatización social y a la represión estatal. En el caso ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) destaca no solo por su capacidad de movilización, sino también por su habilidad para articular demandas locales con escenarios internacionales. En el Caribe, tanto en Puerto Rico como en Haití, las comunidades autónomas han liderado esfuerzos por resistir al colonialismo y la colonialidad del poder, y construir alternativas políticas basadas en el arraigo territorial.

Respecto a las agendas (geo)políticas, en Bolivia se han priorizado las demandas de soberanía indígena, antiextractivismo y democratización del Estado Plurinacional, aunque estas tensiones revelan divisiones entre visiones centralistas y comunitarias. Lo mismo sucede en otros países de la región como México, donde el gobierno de la llamada Cuarta Transformación encuentra en los zapatistas una de sus mayores críticas y resistencias. En Chile, la búsqueda de justicia social a través del proceso constituyente evidenció limitaciones en la articulación de un proyecto inclusivo, especialmente tras el rechazo final de la propuesta constitucional y el empoderamiento de las fuerzas políticas reaccionarias en el segundo proceso constituyente que también fracasó.

En Colombia, las agendas se centraron en la justicia social y la equidad, enfrentando como principales obstáculos la fragmentación política y la represión estatal. A pesar de ello, la movilización y el descontento popular fueron clave para construir consensos transformadores, lo que permitió la llegada al poder de la coalición de izquierda encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez. En Ecuador, en cambio, sin posibilidades de llegar al gobierno y en un estado de inseguridad perpetuo, las agendas se enfocaron en la defensa de los derechos colectivos, la soberanía territorial y la crítica al extractivismo, articulando lo local con lo nacional en una visión de justicia económica y ambiental.

En Puerto Rico, un claro ejemplo de colonialismo en pleno siglo XXI, las agendas se centraron en resistir tanto el colonialismo como la colonialidad, y en rechazar la privatización mediante el fortalecimiento de iniciativas comunitarias que cuestionan el bipartidismo dominante y las estructuras coloniales. A diferencia de Haití, donde las agendas se enfocan en la construcción de alternativas comunitarias frente al colapso estatal, con un enfoque en la justicia social y la defensa de los derechos humanos en un contexto de violencia estructural, en Puerto Rico las agendas se centran en la defensa de los derechos colectivos y la soberanía territorial, vinculando lo local con lo nacional.

Ahora bien, al tratarse de un fenómeno transnacional único que cuestiona las fronteras estatales y los marcos tradicionales de soberanía, es fundamental destacar el análisis que Daniel Villafuerte hace sobre las caravanas migrantes de manera integral, por tratarse de un caso paradigmático de comunidades políticas de pertenencia con características muy particulares. Daniel Villafuerte analiza las caravanas migrantes como una expresión única de comunidades políticas transitorias. Estas caravanas, compuestas por migrantes que huyen de crisis económicas, políticas y sociales, desafían no solo las políticas migratorias restrictivas de México y Estados Unidos, sino también las nociones tradicionales de pertenencia e identidad. Los migrantes que las integran, unidos en una búsqueda colectiva de derechos, dignidad y reconocimiento, incluyen a grupos particularmente vulnerables como mujeres y personas LGBTQ+, quienes enfrentan múltiples capas de violencia y exclusión. A lo largo de su trayecto, las caravanas han articulado una agenda que prioriza los derechos humanos y la libertad de tránsito, confrontando las tensiones entre el control migratorio global y las demandas de justicia y Derechos Humanos.

En el seminario y en los debates que siguieron a las intervenciones de las personas invitadas, surgieron otros temas, como la viabilidad de la categoría del estallido social para describir los fenómenos analizados o el papel de las violencias ejecutadas en el transcurso de las movilizaciones. Es también importante resaltar cómo en varios casos, se contextualizan los procesos sociopolíticos que convergieron en las manifestaciones y protestas que ocurren a partir de 2019 en un marco histórico muy amplio, especialmente en los casos caribeños, pero también en Chile, Colombia y Ecuador. Esperamos que esta obra y el análisis situacional y coyuntural que aquí proponen las y los expertos invitados, ayuden a entender mejor la coyuntura de las luchas sociales en América Latina en los últimos cinco años con sus particulares constelaciones de actores, trayectorias y respuestas organizadas bajo diversos formatos de pertenencia comunitaria.